

LA RESPUESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS ANTE EL PROCESO DE PAZ CONTADORA

Thomas M. Leonard

THOMAS M. LEONARD
Catedrático de Historia, University of North Florida.

En enero de 1983 los presidentes de México, Panamá y Venezuela se reunieron en la Isla Contadora (localizada en la costa pacífica de Panamá) como respuesta a la invitación que les hizo el presidente colombiano Belisario Betancourt. La finalidad de esta reunión fue tratar de encontrar una solución a la crisis que reinaba en América Central. Cuando la reunión se llevó a cabo, había una amenaza de guerra que tenía como finalidad hundir la región. La asistencia militar que los Estados Unidos prestó al gobierno salvadoreño tuvo como finalidad evitar que, los grupos guerrilleros fueran abastecidos en parte por Nicaragua. Al mismo tiempo, los Estados Unidos organizaron y abastecieron a los *contras* quienes eran un ejército contrarrevolucionario compuesto en su mayoría por nicaragüenses exiliados. Su finalidad fue llevar a cabo una guerra de guerrillas dentro de Nicaragua con el fin de desestabilizar el gobierno Sandinista y más tarde desposeerlo de todo poder. Honduras, que había servido tanto como santuario de los *contras*, como base para el incremento continuo de la fuerza militar estadounidense, temía una venganza de parte de los Sandinistas.

Costa Rica, país generalmente tranquilo, estaba inmerso en riñas dada la presencia de los *contras* en la región norte del país, por la presencia de inmigrantes que estaban escapando de los conflictos del norte, y la continua presión de los Estados Unidos cuyo fin era incrementar el estado

de preparación militar. En medio de estos hechos, la forma retórica proveniente de la administración de Reagan se preguntó acerca de la posible intervención militar en el Istmo.

Las naciones que compusieron el Grupo Contadora se unieron al principio, con el deseo de disminuir el dominio de los Estados Unidos en América Central. El grupo Contadora opuesto a la postura de Reagan frente a las relaciones en Latinoamérica dentro de un contexto este-oeste, más que norte-sur, determinó impedir que los Estados Unidos tomaran acción unilateral como esfuerzo para resolver un problema regional a su gusto, como lo hicieron en Guatemala en 1954, en Cuba en 1961 y en la República Dominicana en 1965.

Los cuatro presidentes conocían bien los intereses de seguridad que los Estados Unidos tenían en la región y, como anticomunistas inquebrantables buscaron la eliminación de la influencia cubana y rusa en América Central. Los negociantes del Grupo Contadora entendieron desde el principio que no podían llegar a ningún plan de paz regional sin el apoyo de los Estados Unidos.¹

La administración de Reagan inicialmente apoyó el principio de un acuerdo negociado, como la mejor forma para resolver los problemas de la región. Dada la política administrativa de América Central desde el año de 1981, las críticas acusaron que, el apoyo no era más que opio político.

A pesar de todo lo anterior, el proceso Contadora ofreció una oportunidad única, no disponible en ningún lugar. Si se hubiera usado un vehículo internacional, los Estados Unidos hubieran preferido la Organización de los Estados Americanos en donde Washington tuviera presumiblemente una influencia significativa. El gobierno Sandinista en Managua percibió el dominio de los Estados Unidos, y quiso evitar la OEA y prefirió las Naciones Unidas ya que ahí parecía existir una audiencia más simpática. Los Estados Unidos, en contraste, quiso evitar las Naciones Unidas dada la presencia de un sentimiento antiamericano dentro de las naciones del Tercer Mundo, misma que dominó la tribuna de ingreso.

La Política de Reagan

Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca en enero de 1981 convencido de que el malestar de la administración de Carter, no sólo había empañado la imagen de los Estados Unidos alrededor del mundo, sino, que su falta de decisión y debilidad, habían permitido que avanzaran las fuerzas comunistas. Reagan tomó la determinación de restaurar la imagen americana. Reagan armado con una retórica audaz mostró a los Estados Unidos como una nación fuerte, capaz de hacer retroceder al enemigo, donde fuera y en la forma que éste atacara. Este punto de vista se vio reflejado en su primer equipo político en el extranjero que incluyó: el Secretario de Esta-

do Alexander Haig; Thomas O. Enders, Secretario Asistente del Estado para los Asuntos de América Latina; la Embajadora de las Naciones Unidas, Jeanne Kirkpatrick. La política estaba bien atrincherada para el momento en que George Shultz reemplazó a Haig; para cuando Langhorne H. Motley sucedió a Enders y, subsecuentemente cuando Elliot Abrams reemplazó a Enders.

Si la retórica audaz de Reagan no calzaba con acciones en otro sitio; no era el caso en América Central en donde el presidente creía que el poder y prestigio de los Estados Unidos había disminuido considerablemente frente a la expansión rusa y cubana durante la administración de Carter. El Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia se convencieron de que se debía reafirmar la supremacía de los Estados Unidos en la región. Estos grupos argumentaron que, el hecho de fracasar en su actuación cerca de casa solamente iba a alentar a los rusos a ser más agresivos en otras partes.²

Los objetivos mal definidos de la política de Reagan en América Central se caracterizan por dos consideraciones entrelazadas. Desde su inicio, el proceso de paz del Grupo Contadora, a pesar de haber hablado de dichas consideraciones se enfrentó a una tarea muy difícil.

La Embajadora de las Naciones Unidas, Kirkpatrick expresó mejor los primeros lineamientos. Ella señaló una profunda distinción entre el ala derecha compuesta por los dictadores autoritarios y el ala izquierda. Ella admitió que los dictadores del ala derecha no fueron democráticos y cometieron violaciones a los derechos humanos, sin embargo no molestaron el orden establecido. Ella añade que estos dictadores como el líder anterior de Managua, Anastasio Somoza, fueron abiertamente anticomunistas y partidarios establecidos de la política global de los Estados Unidos. Kirkpatrick creyó que estas dictaduras podrían



Ronald Reagan quería que el poder y el prestigio norteamericanos no disminuyeran en Centroamérica.



convertirse en democracias si hubiera un aliento adecuado. Por otra parte, Kirkpatrick creyó peores a las dictaduras totalitarias, ya que la administración de su gobierno, afirma, es más brutal y ataca los intereses de los Estados Unidos. Además, la

mayoría de ellos demuestran tendencias comunistas.³ La aplicación de esta doctrina en América Central significó la preservación del viejo régimen, con la excepción de Nicaragua en donde fue restaurada.

La segunda consideración geopolítica fue más grande que la anterior, ésta consistió en el entrelazamiento de los gobiernos que no simpatizaban con los Estados Unidos. Los Estados Unidos desde 1893 consideraron el Circuncaribe como una región huésped en donde no se tolerarían usurpaciones extranjeras.⁴ Los soviéticos, según los consejeros de Reagan, expandieron a través de los poderes cubanos su influencia en el Caribe durante la administración de Carter, al punto de amenazar seriamente los intereses de los Estados Unidos. Un ejemplo de lo anterior fue cuando el amontonamiento de materiales crudos que la industria de los Estados Unidos consumía, alcanzó tierra firme a través de las trece rutas marítimas del Caribe. También porque solamente trece de los 475 buques de la Armada no pudieron pasar a través del Canal de Panamá. La vía navegable siguió siendo un factor importante de la política de defensa de los Estados Unidos.

Por último, los sitios costeros de defensa estadounidenses estarían amenazados si los soviéticos construyeran instalaciones aéreas y navales en la región Circuncaribe.⁵

Muchas de las políticas de los Sandinistas desde su llegada al poder en 1979, solamente verificaron sus tendencias totalitarias izquierdistas, así como el lugar que ocuparon en la estrategia soviética en el Caribe. La renuncia de Adolfo Calero, Violeta Chamorro y Edén Pastora indicaron la promesa insatisfecha de una sociedad pluralista. La percepción de Reagan en relación con las tendencias sandinistas se reforzó cuando el gobierno intervino en la economía, por la existencia de una prensa censurada, el establecimiento de un sistema de vigilancia en los vecindarios, el reclutamiento militar, la distribución de la tierra y el aplazamiento de las elecciones. En vez de que Washington interpretara el incremento de provisiones militares en el bloque oriental, la presencia del bloque soviético, incluyendo el cubano, la presencia

de consejeros, la construcción de pistas de aterrizaje, y el desarrollo del ejército más grande de América Central; como una respuesta a la presión militar y económica de los Estados Unidos, la interpretó como una confirmación de la expansión soviética.⁶

Sin tomar en consideración que los cambios de esa política, sean éstos reales o imaginarios; cualquier esfuerzo para encontrar una solución para los problemas de Centroamérica mediante naciones o instituciones no participantes estaba destinado a fracasar.

El Proceso Contadora

El proceso de paz Contadora pasó por cuatro fases diferentes: (1) de enero a septiembre de 1983, (2) de septiembre de 1983 a septiembre de 1984, (3) de octubre de 1984 a diciembre de 1985, y de enero a junio de 1986. Las negociaciones de Contadora en cada uno de estos lapsos de tiempo demostraron una propensión para encontrar una solución que satisficiera las consideraciones básicas de la política externa de Reagan; sin embargo, solamente antagonizaron a los sandinistas en Managua.

Los ministros del exterior de las naciones que conformaron el Grupo Contadora, se reunieron con sus colegas después de su primera reunión en enero de 1983. Para mediados de julio de 1983, convinieron en someter a aprobación ante los gobiernos de América Central un programa de paz dentro de sus lineamientos generales. En septiembre del mismo año llegó la ratificación final del Documento de los Objetivos, comúnmente conocido como Los Veintiún Puntos de Contadora. El documento clamaba por una reducción de fuerzas militares con el fin de producir un equilibrio de fuerza razonable entre las cinco naciones. El documento declaró el retiro de consejeros extranjeros militares, interrupción de toda forma de apoyo para grupos insurgentes operando en contra de los gobiernos

centroamericanos y retiro del territorio centroamericano, término al contrabando y el establecimiento de comunicaciones directas entre los estados con el fin de reducir el conflicto entre ellos.⁷

La administración de Reagan publicó inmediatamente su apoyo a Los Veintiún Puntos, y defendió su apoyo continuo al proceso Contadora.⁸ Sin embargo, la publicación vino cuando la administración alentó y apoyó las actividades contrainsurgentes, expandió su asistencia militar al gobierno de El Salvador, incorporó a Honduras en sus proyectos de defensa regional, presionó a Costa Rica para unirse a "la causa", y públicamente expresó dudas acerca de la disposición de Nicaragua para aceptar cualquier acuerdo. La administración, como respuesta a la crítica que decía que sus principios sirvieron para destrozarse el proceso Contadora, afirmó que sus acciones efectivamente forzaron a los Sandinistas a introducir reformas democráticas en su país y a terminar con el apoyo que le habían brindado a las guerrillas en El Salvador.

Nicaragua, en octubre de 1983, sometió una serie de proyectos de tratados para que se implementaran bajo Los Veintiún Puntos de Contadora.⁹ Los tratados clamaron por un tratado de paz multilateral en América Central, un tratado bilateral con los Estados Unidos y uno concerniente a la guerra civil en El Salvador. La administración de Reagan rechazó inmediatamente las propuestas y anunció que no participaría en ninguna plática directa con los sandinistas. En contraposición, Washington insistió que solamente se podría alcanzar una paz armoniosa aceptable mediante el proceso Contadora.¹⁰ El proceso Contadora continuó a pesar de las señales conflictivas de la administración de Reagan.

El reporte de la Comisión Kissinger de enero de 1984 no fue alentador, a diferencia del de Reagan que lo fue en octubre de 1983. Los miembros de la comisión fueron

pro-administración, a pesar de que en el título apareció la frase "Bipartidismo". Su reporte asentó que los objetivos de las naciones que conformaban el grupo Contadora no siempre fueron paralelos a aquellos de los Estados Unidos, y que en sí mismo, el proceso Contadora no se podía considerar como un sustituto de la política de los Estados Unidos. La comisión concluyó con la advertencia de que la opción de los Estados Unidos seguiría siendo "el uso de la fuerza".¹¹

Consecuentemente, los tres comités que estaban trabajando: el de seguridad regional, el de asuntos políticos y el de cooperación económica y social, terminaron a tiempo su trabajo para la conferencia de los ministros extranjeros regionales que se llevó a cabo del 30 de abril al primero de mayo de 1984. Los gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Honduras, como conclusión de la conferencia, retaron al gobierno de Nicaragua para que se les uniera a cambio de la revelación del número de unidades militares, sistemas de armas, acuerdos militares y envíos de armas provenientes de terceros países, y el nombre del personal militar en cada país. Después de que el gobierno de Managua vaciló, Reagan inmediatamente acusó a los sandinistas de engaño en relación con sus intenciones pacíficas en la región, debido a que ellos estaban sirviendo a algunos intereses extranjeros.¹²

La retórica audaz de Reagan se convirtió pronto en un rumor, al mismo tiempo que se reforzó su posición contra sus principios militares en Centroamérica. Las actividades de los *contras*, tales como el minado de los puertos de Nicaragua, destrucción de los cultivos y la violación de los derechos humanos, se fueron incrementando haciendo que se ensanchara la oposición del Congreso; lo cual conllevó a la suspensión de los fondos para los *contras*. Hubieron otras fuerzas externas que también estuvieron en contra de Reagan. Un ejemplo de ello fue la visita del presidente de Méxi-

co Miguel de la Madrid, quien enfatizó al Congreso la necesidad de alentar el proceso Contadora.

Reagan envió al Secretario de Estado, Shultz, a una visita sorpresa a Managua, aparentemente como respuesta al nacimiento de la ola de oposición. Esta visita dio como resultado una serie de pláticas bilaterales entre los oficiales de los Estados Unidos y los sandinistas en Manzanillo, México. Shultz insistió en la aceptación de los objetivos de la política de los Estados Unidos, lo cual dio el tono a las conversaciones en Manzanillo. Los objetivos estadounidenses eran: reducción del tamaño de la fuerza militar en Nicaragua, interrupción de los lazos entre Managua, Cuba y la Unión Soviética, fin del apoyo sandinista a las guerrillas salvadoreñas, y por último, la implementación del proceso democrático en Nicaragua.¹³

El proceso Contadora continuó en medio de corrientes encontradas hasta que, el 7 de septiembre de 1984, emitió un Acta Revisada a las naciones de Centro América para que la mejoraran mediante sugges-



George Shultz, Secretario de Estado de la administración Reagan.

tiones; más tarde la firmaron. Las disposiciones de seguridad del Acta Revisada repitieron las limitaciones militares que se habían manifestado en el original de los Veintiún Puntos. Esta, además puso limitaciones adicionales en torno al tamaño de las fuerzas militares y a la sofisticación de su armamento. Las disposiciones políticas comprometieron a las repúblicas del Istmo hacia democracias pluralistas, elecciones honestas y protección de los derechos humanos. Las disposiciones económicas solicitaron proteger a los refugiados, promover y desarrollar la integración regional.¹⁴

El Secretario de Estado aplaudió inmediatamente el Acta Revisada, y la describió como si fuese un paso hacia adelante. La postura de la administración dio un giro de 180 grados cuando dos semanas más tarde los sandinistas firmaron inesperadamente el Acta Revisada. Los Sandinistas aprobaron el pacto con la estipulación de que no se hicieran más cambios en el esbozo del tratado y, que los Estados Unidos firmaran el protocolo que le acompañaba; lo cual significaba el fin de su apoyo a los *contras*. Al firmar el Acta Revisada, Nicaragua concedió a los Estados Unidos todo lo que demandaron desde 1981, así como lo que Shultz repitió en mayo pasado durante su visita a Managua. En caso de aceptarla, a los Estados Unidos se les requeriría finalizar sus maniobras militares en la región en un término de treinta días, derribar todas sus instalaciones militares en Centroamérica en un período de seis meses, y por último, suspender sus programas de ayuda militar a Honduras y El Salvador.¹⁵

La administración de Reagan, ante esto, revisó rápidamente su postura pública y emitió una serie de críticas en torno al Acta Revisada. El portavoz de la administración arguyó que, la intención del Acta era ser un mero proyecto, abierto a negociaciones y revisiones futuras. Dijeron también, que el documento era demasiado vago. Pusieron en duda la eficiencia de los procedimientos de verificación, y preguntaron cómo se tra-

tarían las violaciones de los abastecimientos militares. Ellos se opusieron vehementemente ante el requisito en el que los Estados Unidos debían terminar la asistencia militar a sus aliados en la región en un término de treinta días; dado que no existía tiempo límite para dar fin a otros programas de asistencia militar, incluyendo la presencia de consejeros extranjeros.¹⁶ Washington concluyó que, el Acta Revisada rechazaba los intereses de seguridad regionales de los Estados Unidos, con la ventaja de los intereses soviético cubanos. Los oficiales de la administración explicaron al mismo tiempo en privado, que la Casa Blanca creía que los intereses de seguridad regionales permanecían amenazados mientras que los sandinistas mantuvieran el poder en Managua.¹⁷ En otras palabras, se debería expulsar de Managua a los Sandinistas.

Los ministros de relaciones exteriores de Costa Rica, El Salvador y Honduras (Guatemala tuvo un representante pero no firmó el acuerdo final) completaron el llamado Proyecto Tegucigalpa. En éste, las consideraciones de Washington encontraron su cauce. Los intereses de los Estados Unidos se aplacaron mediante la propuesta que proponía el documento¹⁸. Este presentó una fórmula para cada institución de América Central basada en los requisitos de defensa. Las tres naciones, además, fueron responsables del Proyecto Tegucigalpa con la finalidad de buscar la protección de sus propios intereses. El hecho de que Honduras hubiese permitido el aumento y apoyo de los contras, incrementaba su temor ante una venganza de los sandinistas. Honduras vio que la amenaza se podía reducir limitando el tamaño de las milicias centroamericanas. El Salvador no estaba ansioso de cortar la mano a quien le había dado de comer, ya que dependió de los Estados Unidos en su guerra contra el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN). Costa Rica, por su parte, vio la reducción militar como un paso hacia su propia seguridad, ya que estaban ansiosos de reducir las confrontaciones en su fronte-

ra. Sin embargo, esta declaración revisada no tuvo que ver con la presencia militar de los Estados Unidos en la región. Nicaragua rechazó las revisiones sugeridas, ya que no había habido una reducción de la presencia estadounidense.¹⁹

A pesar del estancamiento, el Grupo Contadora continuó trabajando en torno a un acuerdo negociable. Por el lapso de un año, después de octubre de 1984, los representantes de Contadora intentaron armonizar de una forma aceptable las posiciones diversas de Nicaragua y de los Estados Unidos. El proyecto del tratado revisado una vez terminado declaró: la eliminación de las bases y consejeros extranjeros en Centro América; el fin de la competencia de armas en la región; una proscripción del tráfico de armas y, la aplicación de la "democracia" en las cinco naciones. Sin embargo, la propuesta dio marcha atrás a la prohibición categórica de las maniobras militares, pues solamente se refería a su "regulación". No había tampoco requisitos para el cese inmediato de la asistencia de los Estados Unidos a los contras.²⁰ Finalmente, el proyecto revisado puso un límite de tiempo a las negociaciones para atar los cabos sueltos. El acuerdo obviamente favoreció a los intereses de los Estados Unidos más que a los centroamericanos, particularmente Nicaragua.

El abandono de Nicaragua para favorecer a los Estados Unidos se debió a diversos factores. Los cuatro países Contadora, -Colombia, México, Panamá y Venezuela-, desde su junta inicial en enero de 1983, expresaron su desilusión frente al giro izquierdista que había tomado el gobierno Sandinista. El establecimiento del comunismo en Nicaragua preocupó a estos países ya que eran anticomunistas restañados, y temían posibles implicaciones. La economía de Colombia y México empeoró durante este momento, y pidieron asistencia económica a los Estados Unidos. Además de lo anterior, Colombia estaba enfrentando un conflicto guerrillero en su pro-

pio territorio. Dado el aumento de poder de la Guardia Nacional, los Estados Unidos apoyaron la estancia en el poder de Nicolás Barletta, Presidente de Panamá.²¹

Al mismo tiempo, la posición de los Estados Unidos contra los Sandinistas se endureció, particularmente después de octubre de 1984. La Cámara de Representantes endureció la mano del presidente cuando éste anunció a Nicaragua su embargo económico total. Lo anterior dio por resultado: 1- la aprobación de \$27.000.000 para ayuda humana para los contras; 2- la renuncia a extender la enmienda Boland que prohibía al gobierno estadounidense el derrocamiento militar sandinista; 3- la aprobación de la enmienda Foley que autorizaba al presidente usar fuerza militar directa contra los sandinistas sin previo consentimiento del Congreso si las acciones de Nicaragua ponían en peligro a los ciudadanos de los Estados Unidos, si atacaban a sus vecinos centroamericanos, o soportaban indirectamente acciones contra ellos, y por último, permitían que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) diera datos secretos a los contras acerca de los Sandinistas.²²

A los sandinistas no les apetecía rendirse bajo ninguna circunstancia dado el curso que habían tomado los hechos en Washington, ni tampoco dadas las alteraciones que se habían hecho a las propuestas del Grupo Contadora. Ellos, por consiguiente, apoyaron el llamado de Costa Rica en torno a la suspensión del proceso Contadora por un período de seis meses.²³ Las naciones que componían el Grupo Contadora a principios de enero de 1986 hicieron un último esfuerzo para encontrar una solución pacífica a la crisis regional. Esta vez, se les unió el presidente de Guatemala Vinicio Cerezo, electo recientemente. La paz en América Central suavizaría la influencia militar a través del Istmo, incluyendo Guatemala, la cual, había tenido su primer líder civil en casi una generación.



El Frente Sandinista se negó a firmar acuerdos de paz que no incluyeran el cese de la ayuda estadounidense a los "contras".

Las posiciones de Managua y Washington fueron inquebrantables, mismas a las que se tuvo que enfrentar el Grupo Contadora, el cual había puesto como fecha límite el 6 de junio de 1986. Los Sandinistas claramente manifestaron que no firmarían un acuerdo que no contemplara el cese inmediato del apoyo de los Estados Unidos a los contras. El portavoz de Reagan negó rápidamente la aserción que Philip Habib, embajador especial en Centro América, hizo, en donde decía que el acuerdo Contadora caía dentro de los objetivos políticos de la administración. La petición del Grupo Contadora era poner término a toda asistencia militar a lo largo de América Central. En contraste, un oficial de alto rango del Departamento del Estado declaró (no por atribución) que la administración de Reagan "esperaba el derrocamiento" de los sandinistas, y que no estaba interesada en un acuerdo negociado. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa, advirtió que cualquier acuerdo de paz centroamericano que los Sandinistas violaran, requeriría subsecuentemente un compromiso a largo plazo de por lo menos un millón de tropas estadounidenses y \$8,5 billones anuales para corregir la violación del acuerdo de paz.²⁴

El 6 de junio el Grupo Contadora intentó

satisfacer los requisitos que ponían los Estados Unidos, mismos que estaban escritos en el documento Tegucigalpa de 1984, y apaciguó a Nicaragua dándole un fin implícito ante la presencia militar estadounidense en el Istmo. El documento propuso una fórmula para lograr el equilibrio de fuerzas militares en América Central, y estableció Cuerpos Internacionales de Inspectores para que aseguraran su verificación. El protocolo que le acompañó pidió que se le diera fin al uso del territorio fronterizo como área de escenificación de ataques militares. También pidió poner término al apoyo de fuerzas guerrilleras, y a los aliados militares que atraerían al firmante en el conflicto este-oeste. Además, las fuerzas mundiales acordarían en terminar su asistencia a las fuerzas insurgentes en América Central, y así no amenazarían más el uso de la fuerza en caso de reemplazar un gobierno regional existente. Sin embargo, se dejaron para futuras negociaciones los asuntos relacionados a las maniobras militares extranjeras, la asistencia militar, y la presencia de consejeros extranjeros.²⁵

Los Sandinistas anunciaron inmediatamente que firmarían el tratado propuesto recientemente, pero Elliot Abrams, Secretario Asistente de la Secretaría de Estado para los asuntos de América Latina denun-

ció la propuesta: "firma ahora y negocia más tarde". El presidente Reagan, subsecuentemente describió la aceptación Sandinista del proyecto del tratado como un esfuerzo de propaganda para derrocar su petición pendiente en torno a los fondos del Congreso para el esfuerzo militar de los contras. También criticó el proyecto por su debilidad para librar a la región de regímenes "totalitarios Marxista-Leninistas". El presidente efectivamente rechazó el proceso Contadora.²⁶

El proceso Contadora pasó a la Historia sin el respaldo de los Estados Unidos, dejando libre a Washington para perseguir sus objetivos políticos. Antes de que el Congreso se suspendiera durante el verano, aprobó \$100 millones para los contras, incluyendo \$70 millones para asistencia militar. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, revivió el proceso de paz después de un año, esta vez, sin los Estados Unidos.²⁷

Conclusión

La administración de Reagan determinó desde un principio que el gobierno marxista-leninista de Nicaragua no era aceptable para los intereses de seguridad de los Estados Unidos por su conexión con

Cuba y la Unión Soviética. El hecho de que los objetivos de su política no hubieran sido escuchados, es algo que se debe discutir; pero no se puede desmentir su relación al fracaso o éxito del proceso de paz Contadora.

El Grupo Contadora en su superficie, satisfizo los intereses de seguridad de los Estados Unidos. Esto se dio cuando éste

puso restricciones en el tamaño de las fuerzas militares de América Central, rechazando los movimientos insurgentes y dejando abierto a negociaciones futuras los asuntos concernientes a las maniobras militares en la región, asistencia militar y la presencia de consejeros militares. Estas propuestas habrían reducido el tamaño del ejército nicaragüense, y la detención de la línea de abastecimientos sandinistas para el FMLN en El Salvador. Sin embargo, no

redujo la presencia militar de los Estados Unidos en América Central. Aún más, las propuestas del Grupo Contadora fallaron en satisfacer los objetivos del presidente Reagan en torno al despojo del poder político de los sandinistas en Nicaragua. Durante la presidencia de Reagan, el proceso de paz Contadora estuvo condenado al fracaso hasta que no se hubiera resuelto el asunto de los sandinistas.

NOTAS

1. Tom Farer, "Contadora: Hidden Agenda", *Foreign Policy* (Summer 1985) 59-72; Howard J. Wiarda, *In Search of Policy: The United States and Latin America* (Washington: American Enterprise Institute, 1983), 1-11; Thomas O. Enders, "Building the Peace in Central America", *United States Department of State Bulletin*, (Hereafter referred to as *Bulletin*) October 1982, 10; Langhorne H. Moley, "U.S.- Central American Policy at the Crossroads", *United States Department of State, Current Policy* nº. 572, May 1, 1984; and George P. Shultz, "Strengthening Democracy in Central America", *Bulletin* April 1983, 37-45.
2. Jeanne Kirkpatrick, *Dictatorships and Double Standards* (New York: Simon and Shuster, 1982).
3. Thomas M. Leonard, "Keeping the Europeans Out: The United States and Central America Since 1923," in Ralph Lee Woodward, ed. *The Central American Crisis in Historical Perspective* (Westport: Greenwood Press, 1988), 5-20.
4. Timothy Ashby, *The Bear in the Backyard: Moscow's Caribbean Strategy* (Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1987).
5. R. Bruce Mc Colm, "Central America and the Caribbean: The Larger Scenario", *Strategic Review* (Summer 1983), 28-42; and Ashley J. Tellis, "The Geopolitical Stakes in the Central American Crisis", *Strategic Review*, (Fall 1985), 45-56.
6. Inter-American Dialogue, *The Americas in 1984: A Year For Decisions* (Washington: Aspen Institute, 1984), 76-82.
7. "Latin Quandary: Distrusting Nicaragua, White House is Facing A Dilemma Over Policy", *Wall Street Journal*, December 30, 1983.
8. George Shultz, "Comprehensive Strategy for Central America", Department of State, Current Policy 502, August 4, 1983. The United States invasion of Grenada on October 25, 1983 and subsequent effort to revive the Central American Defense Council only increased the criticisms, but fell within the larger geo-political considerations of the administration's policy.
9. Susan Kaufman Purcell, "Demystifying Contadora", *Foreign Affairs*, (Fall 1985), 87-91.
10. "U.S. Spurns Peace Plan Offered By Nicaragua", *New York Times*, October 22, 1983; and "Three Latin Nations Agree to Revive Defense Pact", *New York Times*, October 4, 1983.
11. *Report of the National Bipartisan Commission on Central America* (Washington: Government Printing Office, 1984), 119. For a criticism of the Kissinger Commission Report see William S. Leo Grande, "Through The Looking Glass: The Report of the National Bipartisan Commission for Central America", *World Policy Journal* (Winter 1984), 251-284.
12. "U.S. Says Nicaragua Won't Back Up; Claimed Peaceful Intentions," *Washington Post*, May 1, 1984.
13. "Shultz Nicaragua Trip is Faulted By Some as Step to Quiet Critics", *Wall Street Journal*, June 4, 1984; and "Shultz Trip: Serious Bid For Peace" *New York Times*, June 4, 1984. Cynthia J. Arnson, *Crossroads: Congress, The Reagan Administration, and Central America* (New York: Pantheon Books, 1989) and United States Congress, *Report of the Congressional Committees Investigating the Iran- Contra Affair*, House Report Nº 100-433 and Senate Report Nº 100-216, November 1987.
14. Bruce M. Bagley, Roberto Alvarez and Katherine J. Haggedom (eds.), *Contadora and the Central American Peace Process* (Boulder: Westview Press, 1985), 188-190.
15. William Goodfellow, "Reagan vs. the Sandinistas: The Undeclared War on Nicaragua," (Washington: Center For International Policy, 1986), 12-14.
16. "Latin Peace Plans: Why the U.S. Balks", *New York Times*, October 3, 1984; and "Reagan Administration Moves to Limit Treaty Play' by Nicaragua Marxists," *Wall Street Journal* September 24, 1984.
17. "Latin Peace Plans: Why the U.S. Balks", *New York Times*, October 3, 1984.
18. Goodfellow, "Reagan vs. the Sandinistas", 15-17.
19. "Contadora Group Calls for Peace", *Central American Bulletin*, December 1985, 1-3.
20. Terry Karl, "Mexico, Venezuela and the Contadora Initiative", in Morris Blachman, William Leo Grande and Kenneth Sharpe (eds.) *Confronting Revolution: Security Through Diplomacy* (New York: Pantheon Books, 1986), 271-292; and Bruce M. Bagley and Juan Gabriel Tokatlian, "Colombian Foreign Policy in the 1980s", *Journal of Inter-American Studies and World Affairs*, (Fall 1985), 47-48.
21. "Applying Pressure in Central America", *Washington Post*, November 23, 1985.
22. Goodfellow, "Reagan vs. the Sandinistas", 116-17.
23. "Contadora Peace Efforts Revived", *Washington Post*, January 16, 1986; "Latins Urge U.S. to Halt Contra Aid," *Washington Post*, February 11, 1986; "Habid Called Wrong: Imprecise in Letter on U.S. Latin Policy," *Washington Post*, May 24, 1986; and "Contadora Talks Splits U.S. Agencies", *Washington Post*, May 21, 1986.
24. *Contadora Act on Peace and Cooperation in Central America* (Washington: Center For International Policy, 1986).
25. "Set Own Pace, U.S. Tells Latin Chiefs," *New York Times* May 28, 1986; Department of State, "Essential Elements of Verification," Current Policy 698, May 1986; and "Contadora: A Shift in Position," *Central American Bulletin* (September 1986), 6-7.
26. Luis G. Solís Rivera, "Peace and the Future of the Central America: A Costa Rican Foreign Minister Luis G. Solís-Rivera and presented to the author May 19, 1988. "Central American Leaders Take a Giant Step Toward Peace," *Central American Report*, August 14, 1987, 241-242; and "Five Central American Presidents Sign Peace Pact," *Atlanta Constitution*, August 8, 1987, 1.